

Movimientos sociales y razón liberal: los límites de la historia¹

Pablo Dávalos*

* *Investigador ecuatoriano, profesor de la Universidad Intercultural de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (UINPI). Coordinador del Grupo de Trabajo Movimientos Indígenas en América Latina de CLACSO.*

Introducción

El año 1990 habrá de marcar una coyuntura única para la humanidad; de una parte, con la caída del Muro de Berlín (1989) y el derrumbe de los países socialistas se consolidaban el poder y la hegemonía norteamericanas anunciando una era de profundos desgarramientos y contradicciones; de otra, amanecían a la historia nuevos sujetos políticos de la mano de los movimientos sociales, y agendas diversas, creativas, innovadoras.

Así, la década del noventa será el tiempo del Consenso de Washington, de la intervención del FMI y del Banco Mundial en una estrategia conjunta de transferencia de los costos de la crisis del centro a la periferia y de profundas transformaciones sociales e institucionales. En 1989, John Williamson publicaría el texto que lo haría célebre, en el cual condensa en diez políticas toda la estrategia neoliberal. Unos años después, Francis Fukuyama, un investi-

gador de la Rand Corporation, retomando las tesis del pensador francés Alexis Kojève, propondría el fin de la historia, indicando que el liberalismo en su formato norteamericano era el sueño final de la libertad humana.

Pero también será un tiempo histórico marcado por la resistencia social, cuyos momentos cruciales estuvieron en las movilizaciones de Seattle en noviembre de 1999, de Praga en el año 2000 y de Génova en 2001. En esa coyuntura tensionada por profundas contradicciones y por la constitución real y formal del poder imperial americano, surgirán también en América Latina fuertes movimientos sociales, desde el movimiento zapatista en Chiapas (México) hasta la resistencia Mapuche en Chile y Argentina, pasando por los poderosos movimientos indígenas de Ecuador y Bolivia. Es en toda esta tensión histórica donde subyacen los procesos fundamentales que los atraviesan y que de una u otra manera contribuirán a darles forma y expresión política. Esos procesos explican la dialéctica histórica de los movimientos sociales, su rol en la lucha de clases, sus perspectivas emancipatorias, su camino recorrido, sus posibilidades futuras y sus límites actuales. El presente texto trata de explorar algunos puntos de esa trama sobre la cual actúan los movimientos sociales, tratando de identificar el sentido de la brújula histórica que permita la reconstrucción del horizonte de emancipaciones.

La construcción de la distopía liberal: hacia el Estado mínimo

La deconstitución política de la clase obrera

Uno de los procesos que caracterizan la dialéctica histórica en la cual se inscriben los movimientos sociales es la deconstitución política de la clase obrera y, por tanto, el empobrecimiento del discurso y de la praxis de lo político, del horizonte emancipatorio y de la tensión dialéctica entre lucha social y lucha política. Ello se expresa, entre otros procesos, en la destrucción de toda la institucionalidad creada bajo la concepción del Estado de bienestar y su sustitución por el Estado mínimo neoliberal.

No significa que ahora haya menos trabajadores, sino todo lo contrario; pero los nuevos trabajadores que se incorporan a la globalización no tienen la capacidad política de defender su salario, su jornada laboral, su derecho a la seguridad social, etc. La precarización absoluta de la fuerza de trabajo implica la ruptura de su capacidad organizativa y de su capacidad de defensa como clase. Un retorno al mundo decimonónico que altera radicalmente la relación entre el capital y el trabajo y que deconstituye políticamente a los trabajadores; que los asimila como factores económicos mientras los discrimina como sujetos políticos.

En ese sentido, las políticas de estabilización y de reforma estructural llevadas adelante por el FMI y el Banco Mundial se revelaron como importantes dispositivos epistemológi-

“Las políticas de estabilización y de reforma estructural llevadas adelante por el FMI y el Banco Mundial se revelaron como importantes dispositivos epistemológicos y políticos, que permitieron la desarticulación de la capacidad de organización, de movilización y de participación política de la clase obrera”

cos y políticos, que permitieron la desarticulación de la capacidad de organización, de movilización y de participación política de la clase obrera. En efecto, estas políticas contribuyeron a generar procesos de reprimarización y desindustrialización de las economías, concomitantes con la transformación de la burguesía industrializante en rentista y especulativa —es decir, financiera—, y donde los sectores más modernos pudieron deslocalizar su producción hacia nuevos espacios de deconstitución de la clase obrera: las maquiladoras y las zonas francas. Espacios que son el grado cero de la contractualidad y el locus real hacia el cual parece converger la distopía del Estado mínimo liberal.

Efectivamente, las maquilas son la utopía negativa del capitalismo; son el retorno al capitalismo del siglo XIX en su expresión más atroz de sobreexplotación. En las maquiladoras no hay derechos laborales, no hay derechos humanos, no hay derechos económicos y sociales. Son espacios libres de toda regulación y constituyen una cesión de soberanía del Estado-nación a las corporaciones transnacionales. A medida que el régimen de maquila o de zona franca se consolida y se expande, la clase obrera pierde capacidad de negociación política y ve restringirse, incluso, los horizontes más inmediatos de su capacidad gremial. Esa restricción permanente la deconstituye políticamente y la convierte en un sujeto relativamente fácil de engranar en el nuevo sistema de relaciones de poder del capitalismo mundial.

Sin capacidad de generar mínimas resistencias, pierde ese estatus que alguna vez tuvo de constituirse en el núcleo político de la emancipación social, para convertirse en apenas un grupo de personas que, a falta de cualquier ingreso, son capaces de soportar las peores condiciones laborales. El resultado es que uno de los actores políticos más relevantes ha ido desapareciendo del mapa de los sujetos históricos, y la conflictividad laboral se ha ido difuminando como centro de la conflictividad de clase, en tanto en su lugar se ha posicionado el discurso de la seguridad jurídica y de la criminalización del reclamo laboral. Los pocos sindicatos que aún subsisten y que resisten a las políticas de



© Sol Denot

flexibilización laboral están en su gran parte en el sector público, siendo los sectores que más desgaste político acusan y mayor neutralización de la solidaridad social presentan.

Al desaparecer del horizonte de la acción política, los sindicatos han dejado un territorio que intenta ser clausurado desde el poder pero que es inmediatamente recuperado por los denominados movimientos sociales, siendo los más importantes en el continente los movimientos indígenas, los sindicatos campesinos, los pobladores pobres de las grandes ciudades, las mujeres, etcétera. Sin embargo, estos movimientos sociales entran en ese espacio de acción política con una agenda y un proyecto que no retoma los puntos centrales que habían estructurado históricamente a la clase obrera, esto es, la liberación del trabajo como condición previa para la emancipación social y humana. Es decir, no existe una solución de continuidad entre las luchas de la clase obrera, con su horizonte de transformación histórica cristalizado en su proyecto socialista, y los movimientos sociales. A diferencia de la clase obrera que sabía que su horizonte emancipatorio pasaba por la emancipación del trabajo, vale decir, la eliminación de la explotación humana para desde allí fundar y fundamentar una nueva contractualidad y una sociedad sin explotación, los movimientos sociales que emergen priorizan agendas más concretas e inmediatas y sus horizontes emancipatorios están en pleno proceso de construcción.

La deconstrucción del Estado-nación y de los proyectos nacionales

Un segundo proceso hace referencia a la deconstitución de un formato de Estado-nación que implica la noción clásica de contractualidad y la reconstitución de ese formato en el de un Estado mínimo, represivo, panóptico y liberal. Ello resulta en dos dimensiones: la primera, que refiere a la transformación de la corporación transnacional de un sujeto de derecho privado a un sujeto de derecho privado con atribuciones públicas; y la segunda, que se relaciona con la noción de soberanía y territorialidad.

La pretensión de otorgar este estatuto público a la corporación transnacional pudo observarse cuando se frustró la negociación del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) a fines de la década del noventa en el marco de la OCDE. En este acuerdo se le otorgaba un estatuto particular de soberanía cuasi política a la figura del inversionista y de la inversión privada. En efecto, pretendía convertir al inversionista privado en un sujeto de derecho privado pero con atribuciones públicas al mismo nivel que el Estado; es gracias a esa conversión jurídica que las corporaciones estarían en capacidad de demandar a los estados-nación en el caso de que su inversión haya sido afectada por las políticas públicas o por acciones emprendidas por la sociedad civil.

Una vez fracasado el intento de suscribir el AMI, sus propuestas fueron llevadas al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y luego a los Tratados de Libre Comercio (TLCs) entre Estados Unidos y los países latinoamericanos. Se estableció así un formato único en el que las semiosis "negociación" y "comercio" en realidad enmascaraban una realidad distinta. Porque los TLCs abarcaban entre 18 y 22 mesas de negociación por país, donde los temas exclusivamente comerciales se reducían a dos o tres de ellas y las restantes hacían referencia justamente a las cuestiones propuestas en el AMI, es decir, propiedad intelectual, protección a las inversiones, compras gubernamentales, servicios, etcétera.

Con ello se promueve una especie de desmontaje de las estructuras jurídicas de los estados a nombre de un aperturismo comercial cuyas bondades económicas están en discusión. Los TLCs implican la desestructuración de los estados-nación en su formato clásico y la reconstrucción de la noción de soberanía asentada en la fragmentación y la dispersión de lo nacional. En efecto, concomitante a las políticas de aperturismo y liberalización, el Banco Mundial y la cooperación del desarrollo de algunos países europeos, sobre todo de Alemania, trabajaron intensamente en la desarticulación de las capacidades de generar políticas públicas desde el Estado, a través de la descentralización del mismo como requisito previo para la autonomización política de regiones clave en el sentido económico del término de los estados-nación.

Al dismantelar la capacidad de acción nacional del Estado y convertirlo en un cascarón donde el centro de su actividad pasa a ser la seguridad jurídica (es decir la protección de las inversiones y los inversionistas) y la militarización de los conflictos sociales, se transita a lo que la utopía liberal describe como el Estado mínimo. En este, la relación contractual no es ya entre el Estado y la sociedad civil, sino entre las corporaciones y los individuos, donde estos últimos son considerados solamente como consumidores políticos y económicos.

La mayor referencialidad política de esos individuos sería, entonces, su gobierno local. Pero dicho gobierno tiene circunscripción y control sobre una territorialidad determinada, y eso es precisamente lo que está en juego, el control y el acceso a esa territorialidad y los recursos que comprende; de ahí que los conflictos sociales más importantes tengan como núcleo justamente a la territorialidad. El territorio es el nuevo locus de poder, de confrontación y de resistencia. La apropiación de los recursos que comprenden un territorio está codificada en los TLCs, y su base física ha sido ya diseñada para el caso de América Latina; se trata, en efecto, del Plan Puebla Panamá para Centroamérica y del proyecto de Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA).

En ambos casos se desarrollan ejes multinodales y espacios territoriales que se convierten en el centro de los procesos de acumulación por desposesión. Entonces, y a la larga, la lucha por la defensa del territorio es también la defensa de un tipo de contractualidad liberal. Los movimientos sociales que emergen en la década del noventa también insurgen desde la defensa de su territorio y de sus recursos. Es el caso, por ejemplo, del sindicato campesino del Chapare boliviano que defendía la hoja de coca; o en la misma Bolivia, la lucha por el agua en Cochabamba; o la movilización para evitar la privatización del agua en Uruguay; o la persecución y criminalización de la que han sido objeto los pueblos mapuches en Chile, que defendían su territorio de las empresas madereras o

“La apropiación de los recursos que comprenden un territorio está codificada en los TLCs, y su base física ha sido ya diseñada para el caso de América Latina; se trata, en efecto, del Plan Puebla Panamá para Centroamérica y del proyecto de Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica”

de las hidroeléctricas; o la reciente matanza de los Tarmenane, un pueblo en aislamiento voluntario, por parte de las madereras en Ecuador.

Esta presión política por la deconstrucción del Estado hace que algunos movimientos sociales se hayan posicionado desde una agenda que hace algunas décadas era impensable y que habría sido acusada del peor de los reformismos, y que refiere a la defensa de las instituciones del Estado-nación como mecanismo de defensa propia. Lo que en realidad está en juego es la reducción del horizonte emancipatorio y la simplificación de esa frontera hacia la defensa de las condiciones mínimas de institucionalidad que proponía el Estado liberal clásico.

Mientras la clase obrera pensaba en términos de una transformación radical del sistema capitalista y su sustitución por otro sistema, referenciado en el socialismo, y su horizonte emancipatorio le permitía la construcción de una práctica política de largo aliento y de vastos alcances históricos –lo que incluía sus formas organizativas y su visión de poder–, los movimientos sociales tienen que defenderse dentro de los esquemas de institucionalidad vigente y tratar de defender esa institucionalidad a riesgo de que el Estado mínimo neoliberal finalmente también los deconstruya como movimientos sociales y políticos, los criminalice, y los persiga bajo la acusación de terrorismo.

La deconstitución institucional: hacia un nuevo contrato social

Un tercer proceso que determina las formas de resistencia y de acción de los movimientos sociales es el nuevo tipo de Estado que se está construyendo desde las políticas de estabilización, ajuste y reforma estructural. En el mismo, la contractualidad del discurso clásico del liberalismo está siendo transformada hacia una integración de los procesos sociales como dimensiones de una sola lógica, que es la del mercado.

En este proceso la política se subsume a la economía. Mientras en el discurso del liberalismo clásico la política, la economía y el derecho se establecían como expresiones diferentes pero al mismo tiempo convergentes de aquello que Isaiah Berlin denominaba la libertad negativa y que, en definitiva, constaba en el metarrelato de la contractualidad moderna, en la dinámica actual de la globalización neoliberal el mercado se constituye como centro articulador de las lógicas políticas, económicas y jurídicas.

Así, el mercado no debe entenderse solamente como un espacio de encuentro entre oferentes y demandantes, tampoco debe ser visto solamente como un espacio que permite el intercambio de bienes reales o simbólicos. En esta nueva deriva del liberalismo, el mercado se ha convertido en un locus de sentido histórico, que permite: a) la asignación de recursos y la regulación social; b) la calibración de la eficiencia de las políticas públicas; c) la construc-

ción del mercado mundial capitalista, que Wallerstein ha definido en sentido más amplio como “sistema mundo”; y d) la expresión de la máxima racionalidad posible entre las preferencias del consumidor como nueva figura contractual y el uso eficiente de la escasez de las corporaciones transnacionales. El mercado, entonces, construye la racionalidad del sistema mundo. Si es el locus de racionalidad, entonces es el Estado el que tiene que adecuarse al mismo, incluidos sus marcos institucionales, reguladores y normativos. La distopía del mercado como locus de racionalidad es la propuesta del Estado mínimo del neoliberalismo.

Ahora bien, en esta construcción de la política desde el mercado, la regulación social y la asignación de recursos se separan de los conflictos de poder que les son inherentes, y aparecen sometidas al arbitrio de la “mano invisible”. Desaparece, entonces, del campo de posibilidades humanas la noción de planificación. Los conflictos redistributivos se naturalizan y la explotación se convierte en pobreza, y esta, a su vez, es puesta en la perspectiva del mercado. Es tan fuerte esta noción de pobreza que se deriva del mercado, que incluso los discursos más críticos al capitalismo utilizan el concepto de pobreza y del “dólar diario” (un concepto elaborado por el Banco Mundial) como fenómeno estrictamente económico y natural, incluso para criticar al sistema.

Al constituir al mercado como un centro articulador de racionalidades, no sólo desaparece la planificación como posibilidad humana de controlar la producción y distribución de su propia riqueza, sino que en el campo analítico se evanesce la noción de lucha de clases y los conflictos por el excedente se someten al arbitrio de las leyes naturales de la economía. La hipótesis mistificante de la “mano invisible” sirve para encubrir de un manto metafísico las relaciones de poder que son inherentes a la lucha de clases.

De ahí esa apuesta persistente por la construcción de la economía como una metarrelato sustentado en la matematización de las reacciones del consumidor y de los usos alternativos de recursos escasos por parte del productor, en un contexto de mercados eficientes y equilibrados. Es este metarrelato de la economía, altamente tecnificado, el que ahora sustenta el discurso del poder político. De esta manera, se excluye de la discusión política a todos los movimientos sociales y se los obliga a la parcelación de sus agendas. Se puede criticar al FMI, pero la estabilización de la moneda no se discute. La estabilidad monetaria trata de ser convertida en un “bien público global”. La economía como discurso de poder neutraliza el alcance político de los discursos cuestionadores de los movimientos sociales.

En la medida en que los movimientos sociales entran a la discusión y disputa de ciertos contenidos del proyecto del Estado mínimo, no disputan la globalidad de la agenda neoliberal que ahora ha sido puesta en clave económica. Para disputar el sentido político al neoliberalismo, los movimientos sociales parecieran tener que recurrir a la esfera de la política que ha sido desconectada de la economía. Pero disputar la política no significa cuestionar el



© Patricio Realpe

poder. La participación política en los sistemas de representación aparece como una forma de participación y democracia del sistema porque ese espacio ha sido vaciado de la capacidad de intervención y modificación de las relaciones de poder. La política liberal no le disputa ningún espacio a la economía liberal, solamente redistribuye el poder político entre diferentes fracciones de la sociedad que estarían de acuerdo en lo fundamental, que es el consenso sobre la pertinencia del capitalismo como sistema histórico y universal.

El problema es que los movimientos sociales no han podido deconstruir aún el concepto de democracia liberal e integrar esa deconstrucción, o más bien, esa descolonización, dentro de sus prácticas políticas emancipatorias. Cuestionan a la democracia liberal, pero al mismo tiempo se adscriben a ella como único horizonte posible en la disputa del poder. Esto refiere a la pérdida del sentido histórico de la construcción social y política cuando no se puede disputar la producción y la distribución –con la pérdida de la noción de planificación y redistribución–, cuando no se puede luchar por la definición de un horizonte de largo plazo –con la pérdida de la noción analítica de lucha de clases– y cuando no se puede articular una estrategia coherente de poder y contrapoder –con la pérdida de la noción de la revolución. La noción de mercado como locus de racionalidad social y política disuelve las nociones de planificación, de lucha de clases, de revolución; y al mismo tiempo genera nuevas formas de incorporación social y participación política que son solamente aquellas prescritas por la democracia representativa.

Los límites y posibilidades de los movimientos sociales

Estos procesos conducen a determinar el marco de acción de los movimientos sociales, sus posibilidades históricas y las oportunidades que aparecen con la presencia de agen-

das novedosas. En efecto, con la emergencia de los movimientos sociales, algunas de las certezas políticas que estaban relativamente claras en la lucha de los movimientos revolucionarios, y también de la clase obrera, como la noción del poder como requisito para el cambio revolucionario del sistema, o la noción del partido como organización especializada y hecha para el tránsito revolucionario y para capturar el poder, se transforman radicalmente. Los movimientos sociales que surgen no reclaman el poder ni tampoco adscriben a la conformación de partidos centralizados, jerárquicos y “profesionales”. Por el contrario, se sitúan al margen del poder y muchas veces por fuera de los marcos de lo que la izquierda tradicionalmente denominaba el poder.

En cierto sentido, se ha consolidado una visión del poder que incluso entra en contraposición con las concepciones dominantes del mismo. Debe ser por ello que ha devenido en un clásico de las ciencias sociales el texto de John Holloway sobre cómo cambiar el mundo sin tomar el poder, en el que la influencia del zapatismo es determinante y que da cuenta del sentido que adopta la lucha política de los denominados movimientos sociales latinoamericanos en la década del noventa.

Existe una dispersión en la ubicación de un horizonte emancipatorio que limita una convergencia práctica, metodológica y partidista. Existen nuevas visiones sobre el poder y la participación popular, nuevas propuestas de organización, nuevas plataformas de acción y convergencia que recuerdan las tradicionales en cierto sentido pero que las innovan y las recrean. Aparecen, de hecho, nuevas concepciones que recuperan un discurso que siempre fue patrimonio del discurso liberal, como es el caso de la democracia, y lo ponen en la perspectiva de los movimientos sociales: democracia de género, democracia plurinacional, democracia ecológica, democracia económica.

Los movimientos indígenas, los movimientos de mujeres, los movimientos antiglobalización, los movimientos ecologistas, los movimientos campesinos, los movimientos de los sin techo en las grandes ciudades, de los sin trabajo, etc., todos ellos reivindican una agenda que, definitivamente, enriquece la posibilidad de reconstruir los horizontes emancipatorios y las prácticas políticas de resistencia, pero que, al mismo tiempo, se demuestra incapaz de generar un proyecto político de convergencia de todas las fuerzas en función de un programa unitario, y una acción política en función de la conquista del poder, porque todos ellos discrepan sobre la noción de poder.

Al tener una visión descentrada del poder, una visión más laxa de la organización, un discurso más abierto y una militancia diversa y dispersa, los movimientos sociales enfrentan la aporía de cambiar el sistema sin haber creado un sistema alternativo y con una visión de poder asimismo alternativa.

En efecto, mientras para la clase obrera estaba claro que aquello que vendría luego del capitalismo era el socialismo, para los movimientos sociales las respuestas no están tan claras; adscriben a una idea del socialismo más como un ethos histórico que como una respuesta concreta a sus agendas, pero si se les interroga sobre un futuro poscapitalista, es probable que las respuestas sean diversas.

Tampoco adscriben a la idea de partidos políticos centralizados y mucho menos “profesionales”; también están lejos de la visión de la organización revolucionaria hecha por militantes iluminados y absolutamente entregados a una causa popular. Su matriz es, en ese sentido, más horizontal pero al mismo tiempo más heterogénea y, en términos de poder, más débil; pero en términos de contrapoder es contundente.

Si bien han podido realizar importantes movilizaciones que lograron de una manera u otra detener en cierto sentido el avance del proyecto neoliberal, también es cierto que han sido débiles para revertir el proceso de reforma institucional neoliberal del Estado que se aplicó por toda América Latina. Sus marcos organizativos y sus agendas hicieron de los movimientos sociales reactivos al avance del proyecto neoliberal, pero no han logrado imponer una agenda diferente a ese modelo de Estado y de sociedad.

Frente a ello, los interrogantes que se suscitan son: ¿por qué los movimientos sociales no aprovecharon la riqueza de sus agendas políticas para ampliar el horizonte emancipatorio? ¿Por qué no se dieron alianzas estratégicas y políticas entre la clase obrera y los movimientos sociales? ¿Por qué la izquierda latinoamericana ha sido tan reacia a adscribir en sus proyectos y prácticas políticas propias las agendas y las prácticas de los nuevos movimientos sociales? Y, fundamentalmente, ¿por qué las luchas políticas de los movimientos sociales se han revelado impotentes de revertir el proceso de cambio institucional del Estado en términos neoliberales? ¿Qué proceso político hizo que los movimientos sociales y la izquierda latinoamericana permitieran el avance de esa construcción neoliberal?

La trampa del liberalismo

Quizá Hegel haya tenido razón al anunciar el fin de la historia ya en el siglo XIX. El liberalismo, efectivamente, es el fin de la historia en tanto constituye la anulación de lo político en la validación del mercado como única racionalidad de la historia. Es la subordinación de lo social a lo económico.

Aquel límite que impide la convergencia del horizonte emancipatorio creado por la clase obrera, es decir, la liberación del trabajo, con los horizontes emancipatorios de los movi-



© <www.simone.bruno.name>

mientos sociales, y que pueden condensarse en la figura del re-conocimiento de *la diferencia*, es, justamente, la trampa del liberalismo. Los movimientos sociales han inscrito, de una manera u otra, tanto sus prácticas políticas de resistencia como los contenidos fundamentales de su agenda, quizá sin proponérselo, dentro de la matriz del liberalismo. Pero el liberalismo agota las posibilidades emancipatorias de la humanidad dentro de sus propios contenidos epistémicos y políticos. No puede reconocer la diferencia, ni la de las mujeres, ni la de los indígenas, ni los campesinos, los jóvenes o los ecologistas. Por el contrario, reduce las diferencias a la homogeneización del *zoo politikon*, en la figura del ciudadano que elige a sus representantes en un mercado electoral, y en la figura del *homo economicus*, el consumidor que elige aquellos bienes y servicios que maximizan su función de utilidad en un mercado de bienes y servicios.

El Estado liberal es el muro de cemento en el cual se estrellan, a veces hasta fragmentarse, los proyectos emancipatorios de los movimientos sociales. Tenemos algunas evidencias: el movimiento zapatista, después de la Sexta Declaración de la Selva

Lacandona, da cuenta de su comprensión de las trampas del discurso liberal y, en pleno contexto electoral, anuncia y emprende la realización de la Otra Campaña, con el objetivo de abrir grietas en el muro del liberalismo. Conforme la Otra Campaña recorre México, se demuestra en poblados de nombres olvidados la trama de devastación del modelo neoliberal que en México tiene un soporte fundamental con el tratado de libre comercio con EE.UU. La Otra Campaña recorre los estados mexicanos y constata el despojo, la persecución, la depredación, a los que han sido sometidos pueblos enteros y cuyas demandas no son parte del discurso electoral y ni siquiera aparecen en ese escenario. En algunas poblaciones son los mismos candidatos del PRD los que más implicados están con el poder y con la violencia. ¿Cómo creer entonces al PRD, que dice representar a los pobres, cuando su propia estructura partidaria se revela como un mecanismo fundamental para el ejercicio del poder? ¿Cómo creer que las elecciones van a resolver ese contexto de violencia y despojo?

La Otra Campaña se separa de todas las candidaturas y problematiza lo electoral como recurso de poder. En esa perspectiva, simplemente, no hay opciones; el liberalismo no da posibilidades para que existan opciones. Esta estrategia del EZLN es un intento de lanzarse en contra del muro liberal de una manera más inteligente, pero eso no lo salva de estrellarse. Las elecciones mexicanas demuestran el alcance del fraude electoral del PAN en contra del candidato del PRD y del cinismo de la clase política mexicana, un fraude a todas luces demostrable pero que es funcional a la estructura del poder tanto mexicana como de EE.UU. Pero entre las víctimas propiciatorias que se buscan para explicar el alcance del fraude en contra del PRD, sectores de la izquierda mexicana acusan al zapatismo, y luego de las elecciones mexicanas el zapatismo vive sus momentos más dramáticos, con la amenaza de perder su legitimidad histórica y la pertinencia y viabilidad de su proyecto. El zapatismo tenía razón, el problema del poder es el liberalismo, pero en su conflicto contra el liberalismo salió lastimado. La propia izquierda mexicana se encargó de curar las heridas del sistema político liberal mexicano buscando en las víctimas a los victimarios.

De igual manera vimos estas contradicciones en Ecuador, cuando el movimiento indígena creyó que al ganar el gobierno por vía electoral se podían iniciar los cambios que consideraban fundamentales en su proyecto político, y para ello se alió con el grupo de militares con los que había en conjunto derrocado al ex presidente Mahuad en la coyuntura de enero de 2001. Esta llegada al gobierno los debilitó enormemente y tuvieron que salir de esa alianza a los seis meses de "estar en el poder", con un gran desprestigio social y acusando un fuerte desgaste que se tradujo en una pérdida de su capacidad de movilización. No sólo eso, en la coyuntura electoral más reciente, se ha dicho que el escaso margen electoral del movimiento indígena ecuatoriano da cuenta de su profunda crisis, como si las elecciones fuesen el rasero para medir los alcances históricos de un proyecto político representado por uno de los movimientos sociales más fuertes del continente.

En el caso de Bolivia la situación está en el límite, la estructura organizativa del MAS, los sindicatos campesinos, las juntas de vecinos, las organizaciones indígenas, las organizaciones de mujeres, que apoyaron la candidatura de Evo Morales y que finalmente lo llevaron a la Presidencia, ahora enfrentan el reto más importante de la izquierda en todo el continente y es la confrontación con la estructura liberal del Estado y la negativa de las elites, sobre todo de la región de la "media luna" (Santa Cruz, Tarija, El Pando, Beni), de aceptar la declaración de la Asamblea Constituyente como originaria y fundacional.

En el centro de la discusión, definitivamente, está la estructura liberal del Estado-nación, y la emergencia de nuevos sujetos que buscan, por el momento, acomodar esa estructura a su proyecto histórico. Han existido ya confrontaciones que demuestran que la visión de un capitalismo "andino-amazónico" en realidad contorna el problema fundamental y resulta en la estructura misma del Estado-nación liberal.

En el caso de Brasil, el movimiento social más importante, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), tuvo que poner distancias con el gobierno del PT, cuando este reemplazó su propuesta de cambio social por una administración con carácter asistencialista –como, por ejemplo, su programa "hambre cero"– y por un proyecto pensado e impuesto por la burguesía paulista y por Itamaraty. La razón de Estado, en el caso brasileño, se reveló más importante que la razón histórica del movimiento social. Entre la dupla Palocci-Meirelles y los movimientos sociales, el PT escogió a los primeros, es decir, a la razón de mercado y del Estado liberal.

En el caso de Chile, el modelo neoliberal, luego de liquidar al sindicalismo, liquidó a los movimientos sociales; y al no poder asimilar a los pueblos mapuches a la razón liberal, ha optado por su criminalización y persecución. El nombre de socialismo para el gobierno chileno en realidad es un membrete político a una dinámica de la Concertación que coincide en los contenidos con la derecha, pero que se diferencia, de manera mínima por lo demás, en los métodos. Sin embargo, hay una resurgencia del movimiento social en Chile, de la mano de los jóvenes, de los sindicatos mineros, de los sindicatos de maestros.

Quizá uno de los casos más problemáticos sea la misma Venezuela y su proyecto de Revolución Bolivariana, en la cual se está creando y re-creando al movimiento social desde la estructura del Estado, y en donde la Revolución Bolivariana propone el mismo formato del Estado liberal representativo con algunas dimensiones de política social como nuevo proyecto histórico.

En todos los casos subyacen las mismas inquietudes: ¿cómo poder realizar cambios históricos y fundamentales cuando la matriz desde la cual se proponen esos cambios es el mismo Estado liberal? En otras palabras, ¿pueden cambiarse las sociedades en confor-

midad con la agenda y las plataformas de acción de los movimientos sociales respetando la matriz liberal? Y, ¿qué alternativa tenemos al liberalismo?

Podría pensarse en el socialismo, pero sus dilemas, a nivel epistémico, son los mismos que atraviesan al liberalismo. El socialismo en su versión clásica tampoco puede reconocer a *la diferencia* que representan los movimientos sociales. Su horizonte emancipatorio está construido con los mismos elementos de la modernidad que han destruido pueblos indígenas, que han supeditado y subordinado a las mujeres, que han provocado la destrucción ecológica del planeta. Entonces, ¿no es necesario e imprescindible problematizar incluso los contenidos emancipatorios del discurso del socialismo? De una forma u otra, ¿no es acaso lo que han hecho los movimientos sociales desde sus prácticas históricas? Cuando se dice que se puede cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿acaso no se está denunciando una teoría instrumental del poder que construyó una izquierda sectaria, miope y "unidimensional"? Es necesario comprender los aportes que están haciendo los movimientos sociales de América Latina —particularmente como un aporte que va más allá de la retórica de oposición al liberalismo— y visualizarlos como la única opción para recomponer el horizonte emancipatorio, y por tanto las posibilidades del discurso antisistema y de la utopía libertaria.

Notas

1 El presente artículo es una versión resumida del original que puede consultarse en formato completo en la sección Análisis y Debates de la página web del OSAL <<http://osal.clacso.org>>.